



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 0621-2003-AA/TC
LIMA
ARMANDO MATOS SALHUANA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de abril de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Rosendo César Matos Salhuana, apoderado de don Armando Matos Salhuana, contra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 72, su fecha 27 noviembre de 2002, que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta; y,

ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 1 de febrero de 2000, el recurrente interpone acción de amparo cuestionando la sentencia de la Segunda Sala Laboral de fecha 16 de mayo de 1997, recaída en el Exp. N.º 629-97-BS-S. Manifiesta que la empresa Electroperú S.A., en la que laboraba, ha violado sus derechos a una remuneración justa y equitativa, a una debida retribución, a la seguridad y bienestar familiar, a la protección de la persona humana, entre otros, ya que desde el 1 de enero de 1986 se ha negado a pagarle lo que la escala salarial señalaba, a pesar de la existencia de una sentencia judicial, agrega que al cesar en dicha empresa, el 31 de mayo de 1991, tampoco se le abonó el íntegro de sus remuneraciones ni se le pagó en forma completa su CTS y el REINPRE, por lo que entabló la demanda judicial que culminó con la sentencia impugnada en autos.

Con posterioridad a la interposición de la demanda, con fecha 30 de marzo del mismo año, precisa que la misma debe entenderse en contra de los magistrados integrantes de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo evidente que el proceso de amparo únicamente está referido a determinar si en el Exp. N.º 629-97-BS-S se han afectado derechos constitucionales de contenido procesal, tales como el correspondiente al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, etc.

2. Que, como se aprecia de los escritos presentados en autos por el demandante, los argumentos en su mayoría están dirigidos a cuestionar no la forma en que el Exp. N.º 629-97-BS-S ha sido tramitado, sino el sentido del pronunciamiento, por lo que debe tenerse presente la jurisprudencia uniforme que el Tribunal Constitucional ha emitido sobre el particular, señalando que la vía del amparo no constituye una tercera instancia



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

o vía de revisión de las resoluciones expedidas por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o de la corrección material del fallo adoptado, pues únicamente procede acudir a ella cuando se haya producido la afectación de un derecho fundamental, el que, en el caso de autos, debe tener un contenido procesal.

3. Que este Colegiado comparte lo que sostiene la Corte Interamericana al declarar que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (párrafo 69). [...] Cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas (párrafo 71) [La Corte ha insistido en estos postulados en los casos Baena Ricardo, del 2 de febrero de 2001 (párrafos 124-127), e Ivcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001 (párrafo 105)]".
4. Que, en consecuencia, al no evidenciarse en el caso de autos la afectación de derecho fundamental alguno, resulta de aplicación el inciso 2 del artículo 6° de la Ley N.° 23506.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró **IMPROCEDENTE** la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los autos.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY
GONZALES OJEDA

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)